

Partidos y democracia*

Por Ludolfo Paramio**

* Artículo recibido en abril de 2011.
Artículo aprobado en mayo de 2011.

** Profesor e investigador del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Csic e Instituto Universitario Ortega y Gasset de Madrid.

Los partidos políticos son parte central de los debates sobre la calidad de la democracia y sus “promesas incumplidas”, y reciben críticas por su baja institucionalización o su desconexión con los intereses sociales. En este artículo se admite que los cambios sociales y económicos ocurridos en el último cuarto de siglo han afectado la relación entre sociedad y política, pero se sostiene que los partidos siguen siendo el principal mecanismo de representación democrática, y se argumenta que deben emprender un proceso de fortalecimiento de sus identidades (“marcas” electorales) que los torne más previsibles para los ciudadanos.

Introducción¹

A la vez que la democracia se ha venido extendiendo por el mundo —de forma espectacular hacia el Este desde 1989, y como quizá lo haga ahora en los países árabes—, paralelamente ha crecido la insatisfacción social sobre su funcionamiento. Una de las cuestiones que se plantean con más frecuencia

¹ Este artículo se inscribe en el proyecto CSO2009-09233 del Plan Nacional de I+D, Clases medias y gobernabilidad en América Latina, y profundiza ideas ya apuntadas en “Partidos y ciudadanía en el siglo XXI” (*Revista Digital de Derecho Electoral*, número 7, Tribunal Supremo de Elecciones, San José, Costa Rica, primer semestre de 2009, pp. 103-115).

es la de que los partidos políticos actuales son altamente disfuncionales, lo que ha llevado a proponer su postergación para dar prioridad, primero, a los movimientos sociales, y actualmente a la búsqueda de formas de “democracia cívica” basadas más en la participación y menos en la delegación.

Estas propuestas presentan bastantes debilidades. La primera es que la participación política debe institucionalizarse para evitar que los ciudadanos más organizados –por ejemplo, en movimientos– o más motivados impongan sus preferencias por encima de las del conjunto de la sociedad. Un problema, por cierto, que también puede presentarse dentro de los partidos políticos si los afiliados más militantes –más ideologizados o motivados– imponen su agenda al conjunto del partido. Pero los partidos están sometidos a la competencia electoral y, si sus propuestas se alejan de aquéllas de los votantes, ellos se verán castigados con malos resultados electorales.

Los intentos de postergar la acción de los partidos están condenados de forma lógica a derivar en formas de gobierno plebiscitarias o delegatarias (O'Donnell, 1992), en las cuales la participación de los ciudadanos –por más que reciba un protagonismo teórico con la propuesta de una “democracia participativa”– solamente es efectiva en el momento de revalidar el mandato de los gobernantes o de cambiarlos. Ésta no es una cuestión menor; la democracia es además un conjunto simple de reglas dirigidas a agregar intereses, formar mayorías políticas y resolver pacíficamente los conflictos. Sin los partidos y la institución parlamentaria que es su medio natural no es fácil lograr ni lo uno ni lo otro.

Por otro lado, la democracia incluye la idea de control de los gobernantes. Sin partidos con fuerza parlamentaria este control es imposible, y la fiscalización de la acción de gobierno por los movimientos sociales o por grupos cívicos puede ser irrelevante si el gobernante tiene una base de poder suficiente para aislarlos o para bloquear la acción del gobierno en caso de que proliferen los conflictos particulares sin instancias de agregación y negociación de intereses.

En resumen, los partidos políticos cumplen funciones esenciales para hacer posible el gobierno democrático más allá de la simple renovación de los gobiernos. Si la insatisfacción sobre su funcionamiento se ha extendido, resulta necesario analizar por qué ha llegado a ser así, y ver qué se puede hacer para modificar los partidos existentes o para construir otros nuevos que se adecuen mejor a las demandas sociales.

Lo que se argumenta aquí es, en primer lugar, que desde la crisis petrolera de los años setenta se han producido cambios en el funcionamiento de las economías nacionales —que en América Latina se identifican con las reformas estructurales de comienzos de los años noventa— que han afectado el vínculo entre los ciudadanos y los partidos, ya que éstos han modificado sus programas y su acción de gobierno para ajustarse a la nueva realidad de la economía globalizada. En este caso, la tesis es que los partidos no han conseguido reformular sus estrategias e identidades de forma clara, y que es en este punto donde más se pueden cambiar las cosas.

En segundo lugar, los partidos políticos se han visto afectados por cambios sociológicos que han erosionado la identificación con ellos por parte de los ciudadanos y que específicamente han afectado la transmisión intergeneracional de las identidades políticas. Estos cambios son difícilmente reversibles, y por tanto deberían tomarse como un dato de partida.

En tercer lugar, el espacio público se ha redefinido con el desarrollo de los nuevos medios audiovisuales. La televisión, en particular, se ha convertido en el espacio fundamental para el debate político, y hasta el presente esto ha conducido a la trivialización de dicho debate, con la sustitución de la contraposición de programas políticos por el intercambio de eslóganes y frases brillantes que no necesariamente permiten al ciudadano formarse una opinión sólida sobre lo que cabe esperar de los distintos partidos y candidatos. En este punto parece necesario recordar la necesidad de que los partidos elaboren proyectos políticos capaces de darles una identidad clara ante los electores, con antelación e independencia del propio debate mediático.

La desconfianza hacia los partidos

Existe amplia evidencia de un crecimiento de la desconfianza política en casi todas las democracias. Sobre este hecho se ha escrito mucho y se apunta a diversas causas, que van desde la erosión de las jerarquías y autoridades tradicionales (Inglehart, 1999) hasta el papel de los medios de comunicación, que estarían provocando una trivialización de la información política (Sartori, 1989, 1997) o una reducción del tiempo libre dedicado a la participación política (Putnam, 1995). En todo caso, la desconfianza política alcanza niveles especialmente preocupantes en América Latina.

El alto nivel de desconfianza hacia los partidos, unida a la crisis de los partidos tradicionales de muchos países, apunta a lo que podemos definir como una crisis de representación. Los ciudadanos no se sienten representados por los partidos, por distintas razones. La más llamativa, en gran parte de Latinoamérica, es probablemente la frustración de las expectativas creadas por las reformas económicas aplicadas en la primera mitad de los años noventa.

Las llamadas reformas estructurales fueron presentadas como puerta de entrada a un crecimiento económico estable y duradero, que permitiría resolver los tradicionales problemas de pobreza y desigualdad que no habían encontrado solución con el anterior modelo económico. Toda vez que éste había entrado en una grave crisis durante la década de la deuda, con mayor o menor resistencia la mayor parte de la sociedad aceptó entrar en el nuevo juego.

Con muy pocas excepciones, los partidos que habían representado los intereses sociales bajo el modelo anterior se adaptaron al nuevo. Eso significó a menudo aceptar —incluso exagerar, con la lógica de los conversos— el discurso del consenso de Washington que justificaba las reformas estructurales. Este cambio “ideológico” significó probablemente una dura prueba para los seguidores de estos partidos, pero es posible que, a falta de alternativas, gran parte de ellos mantuviera su lealtad.

Desde 1997, sin embargo, la media década de crisis que afectó nuevamente a la región fue excesiva para muchos de esos seguidores leales, o al menos para quienes podrían haberlo sido en otras circunstancias (sus hijos, por ejemplo). Un cambio de rumbo tan marcado como el que entrañaba la aceptación del Consenso de Washington solo era aceptable si llevaba a alguna parte. Si de nuevo conducía al estancamiento y la crisis social, era inevitable que se viniera abajo la credibilidad de los partidos afectados.

Hay que tener en cuenta, además, el debilitamiento de las identidades partidarias que se ha producido en todas las sociedades a causa de la erosión de la familia como mecanismo de socialización, de los procesos caóticos de urbanización y del creciente papel de los medios de comunicación en la conformación de la opinión pública.

La elevación de los niveles de vida y la ampliación de los años de estudio crearon, inicialmente en las clases medias, un fenómeno nuevo. La juventud dejó de ser un dato biológico para convertirse en un grupo de edad con una existencia estable y que en años sucesivos ha ido ampliándose para incluir a los treintañeros. Lo que antes era una breve transición de la infancia y la escuela al mundo adulto, al trabajo, pasó a ser un periodo duradero de existencia social, con sus propias reglas y patrones de consumo, y sobre todo con sus propios mecanismos de socialización.

Los nuevos jóvenes ya no interiorizan las normas familiares, ni viven todavía las normas impuestas por el mundo del trabajo. El grupo de pares y el mundo del ocio, incluidos cada vez más los medios audiovisuales, determinan una experiencia vital distinta, en la que se desarrolla una nueva conciencia individual. En términos políticos, eso significa que los mecanismos tradicionales de socialización política —primero la familia y después la experiencia colectiva del conflicto laboral— pierden peso o se posponen en el tiempo.

En el espacio de una generación se vieron erosionadas decisivamente las jerarquías y las identidades colectivas que habían marcado a la sociedad

anterior, y surgió en cambio un nuevo individualismo. La desconfianza hacia la familia patriarcal tradicional, el rechazo de la legitimidad tradicional o racional de la autoridad política, la puesta en duda del saber académico y de sus instituciones, e incluso una fuerte creencia en la autorrealización —antes solo arraigada en un sector de la cultura de Estados Unidos—, serían la herencia de un cambio social que se escenificó con los choques generacionales de 1968.

Es frecuente encontrar denuncias como la de Daniel Bell (1976) sobre la regresión cultural que se produjo en años sucesivos, y es fácil comprender que algunos de los valores del individualismo de esa nueva generación fueron la tierra en la que echó raíces el neoconservadurismo que en los años ochenta encarnó Ronald Reagan. Pero lo que aquí interesa subrayar es cómo ese nuevo individualismo, junto con los cambios económicos provocados por la crisis de los años setenta —aunque no solo a consecuencia de ellos—, condujo a la erosión de las identidades colectivas que habían constituido los cimientos de la sociedad de posguerra.

El cambio en la naturaleza y la fuerza de los vínculos de identificación entre los electores y los partidos es probablemente un proceso irreversible, consecuencia de la modernización social, y darle demasiadas vueltas al asunto solo puede conducir a la melancolía. Ahora bien, en lo que afecta a sus consecuencias sobre la confianza en la política parece que pueden evitarse sus aspectos más negativos y que la responsabilidad corresponde a quienes ostentan el liderazgo político.

Los cambios tienen dos aspectos principales. El primero es que no se puede pensar en una reproducción automática —fundamentalmente a través de la familia— de la identificación partidaria, como antes se pensaba que sucedía (Converse, 1969), hasta el punto de otorgar a la demografía de los electores de un partido un papel fundamental en los realineamientos partidarios (Ander- sen, 1976). El establecimiento de un vínculo de identificación con un partido depende de muchos más elementos, fundamentalmente el interés por la po-

lítica, la red de relaciones sociales y la evaluación personal de la actuación de los gobiernos.

El segundo aspecto se refiere al hecho de que los cambios en la opinión pública —en el humor del público— pesan mucho a la hora de mantener o abandonar la identificación con un partido, y que los medios de comunicación —sobre todo la televisión— tienen un papel decisivo tanto en la formación de la opinión pública como en el debilitamiento o refuerzo de una identificación partidaria. Incluso la proporción de electores identificados —sobre el total de los electores— depende en buena medida del clima de opinión pública: en situaciones de polarización política crecerá el número de electores identificados con uno de los partidos enfrentados.

En este segundo aspecto es evidente que los partidos han aprendido a desarrollar nuevas estrategias comunicativas para llegar a los electores a través de los medios, tanto para tratar de conformar a la opinión pública como para reforzar y movilizar a los propios electores (Popkin, 1991). Pero en este esfuerzo sacrifican a menudo lo que podríamos llamar la identidad partidaria al éxito, en términos de efecto inmediato, de la estrategia comunicativa. Por decirlo así, se privilegia el impacto sobre el discurso.

Por supuesto una estrategia comunicativa que no consigue efectos una mala estrategia. Ahora bien, lo ideal es que ellos refuercen —o creen— una identidad partidaria que vaya más allá de la campaña o del candidato concreto y que pueda tener continuidad en la opinión pública. Esto exige coherencia entre los distintos resultados que se buscan en una campaña, coherencia entre sus significados sucesivos y de éstos, a su vez, con un discurso que actúe como definitorio de la identidad partidaria, que cree, para decirlo de otra manera, una “marca” reconocible del partido.

Tras los cambios de los años noventa es muy posible que las viejas ideologías, los discursos tradicionales, no puedan recuperarse. Sobre todo si se identifican con liderazgos que el tiempo ha amortizado o que, en el peor de

los casos, han quedado desacreditados. Un nuevo liderazgo exige un discurso nuevo, y este discurso solo llegará a la opinión pública a través de impactos en los medios de comunicación. Pero debe haber un verdadero discurso, una narración de los problemas sociales y nacionales en la que cobren sentido las propuestas del partido o del candidato.

Una narración que será preciso actualizar o reformular continuamente y que debe dar continuidad a la identificación de los electores con el partido y a la vez servir de base para alcanzar credibilidad entre un público más amplio. Se trata, en suma, de que los ciudadanos puedan prever nuevamente lo que va a hacer un partido si llega al gobierno, una vez superados los sobresaltos y los giros que acompañaron a las reformas estructurales.

Un partido confiable es un partido previsible. Eso significa una identidad política que no esté sometida a los vaivenes de la coyuntura política o de los cambios de liderazgo. Exige la voluntad de ir más allá de un gobierno o de un periodo electoral y construir un discurso propio que permita a los electores confiar en un partido por saber lo que hará —o no hará en ningún caso— si gana las elecciones. Para que los partidos vuelvan a ser confiables, ante todo deben parecerlo.

La personalización de la política

Uno de los efectos del debilitamiento de las identificaciones partidarias y del mayor papel de los medios de comunicación es la personalización de la política. Esto exige del gobernante o del candidato un fuerte protagonismo: sus palabras y su imagen son la clave de la valoración del gobierno o de los resultados electorales. Y también explican la mayor permeabilidad del sistema político a la irrupción de personalidades ajenas a él y con los suficientes recursos comunicativos.

Ahora bien, la personalización del liderazgo puede contribuir a la pérdida de confianza en las instituciones en la medida en que el gobernante apuesta

por una democracia decisionista y plebiscitaria. El problema que se quiere subrayar ahora no es el del debilitamiento de los controles democráticos, sino el de su devaluación ante la opinión pública. Por supuesto que ambos procesos pueden ir unidos: cuando el Presidente arremete contra el Parlamento acusándole de bloquear la acción de gobierno no solo pone en peligro la división de poderes sino que además daña deliberadamente la imagen del legislativo.

La forma de gobernar puede ser respetuosa de las reglas institucionales y a la vez perjudicial para la confianza en las instituciones. Un ejemplo es el gobernante imprescindible y omnipresente, que sustituye a los ministros en sus funciones y les ordena o humilla en público para demostrar su absoluto control del gobierno y su capacidad de iniciativa. Esta forma de gobernar —y de comunicar la acción de gobierno— puede ser muy rentable para quien la adopta con éxito, pero implica algunos riesgos obvios.

El primero es la inexistencia de “fusibles” cuando se producen errores graves. Si el gobierno se resume en una persona, cualquier error significativo dañará la imagen de ese único gobernante. Sin embargo, a la vez que en muchos países se realizan ensayos de crear un primer ministro que permita al Presidente amortiguar el desgaste de su gobierno, en otros estamos viendo crecer el protagonismo presidencial en el sentido opuesto. Lo menos que se puede decir es que una excesiva personalización del gobierno, aunque pueda ser rentable si las cosas van bien, corre el riesgo de crear una grave fragilidad en la legitimidad del Ejecutivo.

El segundo riesgo atañe a la calidad de la democracia, incluso si el Ejecutivo no llega a verse en situaciones de pérdida de legitimidad de ejercicio, como las que en años recientes hemos observado en varios países. La clave de la democracia es el gobierno de las instituciones, no el protagonismo providencial de las personas. Reforzar el papel y la imagen de las instituciones por encima del protagonismo personal de los gobernantes es una exigencia de la ética democrática.

Por otra parte, la personalización de la política y la desconfianza hacia los partidos afectan la forma como los ciudadanos pueden premiar o castigar a los gobernantes. Ante unos malos resultados económicos, lo esperable sería que los electores castigaran al partido del gobernante apoyando al candidato del partido de la oposición (lo que suele llamarse voto económico). Pero si los partidos no ofrecen confianza a los electores, éstos no buscarán alternativas en ellos sino en personalidades ajenas a los partidos que gocen de popularidad y en las que vean a líderes potenciales.

Ese no es necesariamente el mejor procedimiento para elegir gobernantes, pero los partidos solo pueden plegarse a esta tendencia, reclutando o apoyando a personalidades con alta popularidad, o intentar desafiarla con candidatos propios. La experiencia muestra que, con cierta frecuencia, buenos candidatos procedentes de partidos políticos pueden verse derrotados por personalidades populares no necesariamente mejor dotadas para el ejercicio del gobierno o de la representación, o al menos ver muy disminuido su apoyo a causa de la competencia con estos candidatos extrapartidarios.

Esto, a su vez, puede acelerar el descrédito de la política si un gobernante ajeno a los partidos tradicionales no está a la altura de las expectativas. Los electores, paradójicamente, no suelen considerar el fracaso de un gobernante extrapartidario como una razón para recuperar la confianza en los partidos, sino como un nuevo argumento para desconfiar de la política y, por ello, de los partidos políticos. Puede producirse por tanto una espiral de desconfianza hacia la política y los partidos, acelerada por el mayor peso en la política por parte de personalidades ajenas a ella.

Por múltiples que puedan ser los vicios que conlleva la política tradicional, de un político de partido cabe esperar una cierta profesionalidad, un conocimiento de las reglas del diálogo y la negociación en el ámbito parlamentario, de los procedimientos presupuestarios y de las pautas a seguir en la toma de decisiones y el diseño de actuaciones. La falta de este conocimiento, y de la experiencia previa de la que surge, puede hacer que

un gobernante ajeno a la política, un no profesional, consiga inicialmente un amplio margen de simpatía en la opinión pero no sea capaz de traducirlo en resultados tangibles. Ante la decepción de los electores, no será inusual que el gobernante culpe a las instituciones democráticas de ser solo rémoras corruptas que le frenan en su intento de dar solución a los problemas nacionales.

Así, la frustración de los electores ante la falta de resultados de los gobiernos en situaciones de crisis económica —como las que vivió América Latina entre 1998 y 2003— ha desatado en muchos países una oleada de proyectos de refundación institucional, bajo la forma de Asambleas Constituyentes, con las cuales los gobernantes buscan introducir nuevas reglas del juego y obviar lo que ven como frenos —heredados de la clase política tradicional— que les impiden satisfacer las demandas de los electores.

Aunque siempre puede haber buenas razones para reformar o rediseñar las instituciones, es inevitable la sospecha de que detrás de esta moda de hacer tabla rasa de las instituciones anteriores existe el doble propósito de debilitar los controles democráticos —la desconfianza institucionalizada— y de ganar la confianza de los electores ofreciéndoles un blanco para su frustración, un chivo expiatorio de las dificultades que enfrentan los gobiernos para ofrecer resultados positivos a las demandas de los ciudadanos.

Por otro lado, la personalización de la política disminuye también la capacidad de los ciudadanos para juzgar la gestión de un gobierno castigando o apoyando al partido de gobierno en elecciones de otro orden o en las siguientes elecciones presidenciales. En la medida en que el protagonismo político pasa a personalidades populares que no han forjado sus candidaturas a partir de un partido, los gobernantes pueden prescindir de la opinión o el juicio de su propio partido. Tanto si se trata de personalidades independientes que se presentan con el respaldo de un partido preexistente, como de que hayan creado expresamente una organización nueva, el destino futuro del partido puede resultarles indiferente.

Así, la forma de control que ejercen los ciudadanos al castigar electoralmente al partido que realiza un mal gobierno no impone límites al gobernante, y el partido, que en condiciones normales puede introducir –por razones de supervivencia institucional– un cálculo de medio y largo plazo en la acción de gobierno, no tendrá más capacidad para controlar al gobernante que el enfrentamiento abierto en el Parlamento, lo que bien puede conducir al propio partido a una crisis extrema de credibilidad externa y división interna.

Otra forma de hacer política

Quizá el objetivo central de recuperar la confianza social o mantenerla es mostrar que las demandas sociales constituyen una clara prioridad de los partidos y del gobierno. Tras una década de confiar en que el mercado resolvería por sí solo los problemas sociales, hoy existe una clara demanda social de que el Estado asuma cierto protagonismo, una exigencia de que el gobierno regule la economía para garantizar que el mercado esté al servicio de la sociedad y no al revés.

Frente a una visión crecientemente intervencionista del Estado en la economía como la que hoy se extiende en algunos países, se diría que lo más eficaz para atender las necesidades sociales, a juzgar al menos por la experiencia de casi todos los países desarrollados, es una combinación de servicios públicos universales y empresas privadas reguladas por el Estado con el propósito de lograr la eficiencia propia del mercado y tener la garantía de que su funcionamiento responde a las necesidades sociales.

La combinación ideal de propiedad pública y propiedad privada es algo que depende mucho de la historia y las circunstancias propias de cada país. Pero en todo caso se trata de una decisión más pragmática que ideológica, y, por el contrario, existe el riesgo de que el debate derive hacia premisas ideológicas. La alternativa de la polarización política sobre una visión ideológica de la economía es dar prioridad a la política social, en su sentido más amplio, que

incluye educación, sanidad, vivienda y empleo. Y darle prioridad significa también, en lo posible, llegar a acuerdos con la oposición para crear programas que tengan un efecto acumulativo a medio plazo.

En muchos países latinoamericanos se ha extendido la idea de que es necesaria la reelección de los gobernantes para que éstos puedan alcanzar objetivos que superan el horizonte de un mandato. Pero, más allá de los obstáculos políticos o constitucionales que en cada nación pueden existir para la reelección, parece indudable que algunos objetivos solo pueden alcanzarse cuando existe continuidad en las políticas, cuando éstas pueden llegar a tener efecto acumulativo.

Este efecto no solo se puede alcanzar con la continuidad de los gobernantes, sino también con el acuerdo —explícito o implícito— entre gobierno y oposición sobre las prioridades y objetivos de las políticas. De hecho, proponer un acuerdo semejante sobre lo que ha dado en llamarse “agenda del país” puede ofrecer a los ciudadanos una buena señal de que existe una voluntad seria de dar respuesta a sus demandas y de que éstas no han sido solo una bandera electoral para llegar al gobierno. Si ofrecer resultados positivos es lo que más puede ganar la confianza social, buscar un compromiso a largo plazo sobre esos objetivos es la mejor señal de que realmente se intenta alcanzar resultados por encima de las conveniencias partidarias.

Esto es crucial, por varias razones. La primera es que, como se señalaba al comienzo, es muy probable que la principal explicación de que haya disminuido la credibilidad de los partidos y la confianza en la política reside en la incertidumbre de los ciudadanos ante los cambios económicos y sociales que se han venido produciendo desde la década de 1980. Por eso una tarea fundamental de la política democrática es ofrecer a los ciudadanos certidumbres sobre el futuro, motivos para confiar en las instituciones que deben garantizarles su futuro.

Hay otra razón para que la solidez y la continuidad de la política social sean cruciales para la democracia. La desigualdad es enemiga de la democracia y en particular de la participación democrática de los ciudadanos. Al crecer la desigualdad crece el retraimiento ante la política, no solo porque disminuye el tiempo disponible o el nivel cultural y educativo de los tramos de renta más bajos, sino también por una percepción de la inutilidad de intentar defender los propios intereses frente a quienes poseen mayores recursos (Solt, 2008). La famosa frase “los políticos no se preocupan de la gente como yo” es el reflejo en las encuestas del sentimiento de impotencia de los ciudadanos para enderezar su suerte a través de la política democrática cuando sienten que se enfrentan a poderosos intereses económicos.

Si fuera posible enumerar unos mandamientos para conservar la confianza de los ciudadanos en la política, el primero sería probablemente evitar el crecimiento de la desigualdad, inclusive antes que conseguir altos niveles de crecimiento. De hecho, los ciudadanos parecen más partidarios de crecimientos moderados pero estables que de crecimientos rápidos que después pueden dar paso a crisis que de nuevo aumentan la desigualdad (Quinn y Woolley, 2001). El segundo mandamiento sería, como se señalaba antes, reducir la incertidumbre de los electores garantizando la continuidad de las políticas de las que depende su futuro.

El problema es que los cambios en la economía global han provocado cambios de políticas y un mayor o menor crecimiento de la desigualdad, según los países, lo cual ha ocasionado una caída de la confianza de los ciudadanos en la política democrática, sus instituciones y sus reglas del juego. El problema actual, por tanto, no es solo saber qué se puede hacer para que no siga creciendo la desconfianza, sino qué puede y debe emprenderse para crear una nueva confianza, a fin de que el actual descenso pueda interpretarse históricamente como un accidente propio de un cambio de época, como el coste de la adaptación a unas nuevas reglas del juego.

En este sentido es necesario ante todo una gran modestia, o, si se quiere, un fuerte realismo. En primer lugar, no hay sistemas políticos perfectos que se puedan ajustar sin costes a un cambio como el que se ha producido en la economía global en los últimos treinta años. Lo raro sería que estas mutaciones económicas y sociales no se hubieran cobrado un precio en la confianza de los ciudadanos respecto de sus representantes.

En segundo lugar, no existen soluciones mágicas para recuperar la confianza, sobre todo si pretendemos remitirnos a un pasado, más o menos idealizado, de identificaciones partidarias fuertes y estables. Por el contrario, solo cabe dar pasos graduales para aproximar la política democrática a los ciudadanos, y en especial para mostrarles que su participación cuenta, que su voto es efectivo. Precisamente entre las personas con menor identificación partidaria es más importante el efecto de la participación para hacerlas sentir políticamente eficaces (Ikeda, Kobayashi y Hoshimoto, 2008).

Se podría decir entonces que la primera tarea que deberían plantearse los partidos es dar prioridad a los problemas sociales y no permitir que la agenda política se vea dominada por cuestiones “políticas”. La estrategia de convertir en prioritaria la reforma o refundación de las instituciones políticas puede atraer la atención del público durante un tiempo, sobre todo si esta reforma aparece como un castigo contra una “clase política” ineficiente o corrupta, o ambas cosas, pero las demandas sociales acabarán reapareciendo si su resolución se pospone hasta los cambios institucionales.

Tampoco basta con tratar de resolver los problemas sociales si las políticas que se ponen en marcha con esta finalidad no son enmarcadas en un proyecto inteligible para los ciudadanos. Es necesario construir “relatos” de las transformaciones que se quieren emprender, relatos que incluyan no solo los objetivos concretos que se pretende alcanzar sino también su sentido, entendiendo por tal una idea del modelo de sociedad al que se aspira.

Para ello es preciso ante todo que los propios partidos sean capaces de plantearse la tarea de elaborar un proyecto. La dinámica de los debates mediáticos —y las preferencias de los consultores electorales— favorece, por el contrario, el enunciado de medidas espectaculares a las que se da protagonismo a expensas de un sentido global. Sin embargo, no es imposible combinar anuncios o ideas de impacto con un relato que les imprima un sentido global: la campaña electoral realizada en 2008 por el actual presidente Obama puede ser el mejor ejemplo.

Desde que comenzó a hablarse de la disfuncionalidad de los partidos se viene hablando también de sustituirlos o de complementarlos con otros mecanismos de participación política, y sobre todo se ha insistido mucho en la necesidad de que los partidos se modernicen. Todas estas pueden ser tareas necesarias, pero quizá se debiera plantear como prioritario el objetivo de dar identidad política a los partidos, de dotarles de un discurso que vaya más allá de las propuestas y objetivos inmediatos y permita a los ciudadanos saber cuál es el modelo de sociedad al que aspiran.

Para ello es necesario que los propios partidos dejen de comportarse como grupos de notables, sin más idea común que ganar las siguientes elecciones (o mantener el control del aparato partidario), y que los asesores electorales comprendan también que lo que era muy moderno y eficaz a comienzos de este siglo puede estar dejando de serlo.

Bibliografía

Andersen, K., 1976, “Generation, partisan shift, and realignment: a glance back at the New Deal”, en Nie, N. H.; Verba, S. y Petrocik, J. R., *The changing American voter*; pp. 74-95, Cambridge, Harvard University Press, 1979.

Bell, D., 1976, *Las contradicciones culturales del capitalismo*, Madrid, Alianza.

Converse, P.E., 1969, “Of time and partisan stability”, en *Comparative Political Studies*, número 2, pp. 139-171.

Dalton, R. J., 1999, “Political support in advanced industrial democracies”, en Norris, P., comp., *Critical citizens: global support for democratic government*, Nueva York, Oxford University Press, pp. 57-77.

Ikeda, K.; Kobayashi, T. y Hoshimoto, M., 2008, “Does political participation make a difference? The relationship between political choice, civic engagement and political efficacy”, en *Electoral Studies*, número 27, pp. 77-88.

Inglehart, R., 1999, “Postmodernization erodes respect for authority, but increases support for democracy”, en Norris, P., comp., *Critical citizens: global support for democratic government*, Nueva York, Oxford University Press, pp. 236-256.

Kitschelt, H., 1993, “La estructura de clases y las estrategias de los partidos socialdemócratas”, en *Zona Abierta*, número 86-87, pp. 57-111.

O'Donnell, G., 1992, “¿Democracia delegativa?”, en *Contrapuntos: ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización*, Buenos Aires, Paidós, pp. 287-304.

Popkin, S. L., 1991, *The reasoning voter: communication and persuasion in presidential campaigns*, Chicago, University of Chicago Press.

Putnam, R. D., 1995, “Bowling alone: America's declining social capital”, en *Journal of Democracy*, 6 (1), pp. 65-78.

Quinn, D. P., y Woolley, J. T., 2001, “Democracy and national economic performance: the preference for stability”, en *American Journal of Political Science*, número 45, pp. 634-657.

Sartori, G., 1989, “Videopolitica”, en *Rivista Italiana di Scienza Politica*, número 19, pp. 185-197.

-----, 1997, *Homo videns: la sociedad teledirigida*, Madrid, Taurus.

Solt, F., 2008, “Economic inequality and democratic political engagement”, en *American Journal of Political Science*, número 52, pp. 48-60.